

República de Colombia
Rama Judicial



Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

Santiago de Cali, quince (15) de febrero de dos mil veintiuno (2021).

Auto de sustanciación No. 33

RADICACIÓN: 76001-23-33-000-2021-00139-00
MEDIO DE CONTROL: POPULAR
DEMANDANTE: JOSÉ ANTONIO QUICENO
DEMANDADAS: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL,
INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE
MEDICAMENTOS (INVIMA).
TEMA: INADMITE MEDIO DE CONTROL- REQUISITO DE
PROCEDIBILIDAD -RECLAMACIÓN
PREVIA PREVISTA EN LOS ARTS. 144 Y 161 DEL
C.P.A.C.A.

Procede este Despacho a resolver sobre la admisibilidad de demanda interpuesta en ejercicio del medio de control para la protección de los derechos e intereses colectivos, consagrada en el artículo 144 del CPACA.

I. ANTECEDENTES

El señor JOSE ANTONIO QUICENO presentó demanda popular en procura de obtener la protección de los derechos colectivos a la moralidad administrativa, la salubridad pública el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, el acceso a los servicios públicos de salud y a que su prestación sea eficiente y oportuna, los derechos de los consumidores y usuarios, y los fundamentales a la salud como derecho fundamental autónomo, a la vida misma, y en su conexión con la salud pública, a la dignidad humana, a la integridad personal, al considerarlos vulnerados por el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS (INVIMA), al no autorizar de manera inmediata en Colombia el tratamiento con la intervención temprana mediante la utilización de ivermectina, nitazoxanida y aspirina.

Frente al requisito de procedibilidad previsto en los artículos 144 y 161 de la Ley 1437 de 2011, el actor solicita en el libelo se le exima de la exigencia del mismo, aduciendo *"...la situación de perjuicio irremediable en contra de los derechos colectivos a la salubridad pública; y el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; el acceso a los servicios públicos de salud y a que su prestación sea eficiente y oportuna, por cuanto de no ordenarse la medida se incrementará el colapso en camas uci..."*.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Jurisdicción y Competencia.

La Corporación tiene competencia para conocer del presente medio de control popular, en virtud de lo dispuesto en el numeral 16° del artículo 152 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), al estar demandadas entidades del orden de Nacional, como el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS (INVIMA).

2.2. Requisito de Procedibilidad

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 144 y 161 del CPACA, para acudir ante la jurisdicción a través del medio de control para la protección de los derechos e intereses colectivos, se requiere, entre otros requisitos, que previamente el actor haya solicitado a la autoridad administrativa adoptar las medidas necesarias para la protección del derecho o interés colectivo que aduce estar amenazado o violado, y que transcurridos 15 días, la autoridad no haya atendido la reclamación o se niegue a hacerlo.

Excepcionalmente la norma consigna, que *“...se podrá prescindir de este requisito, cuando exista inminente peligro de ocurrir un perjuicio irremediable en contra de los derechos e intereses colectivos, situación que deberá sustentarse en la demanda.”*

Así, sobre el cumplimiento de este requisito, revisado el plenario se tiene que junto con el libelo introductorio, el actor allega un archivo denominado *“petición renuencia ivermectina .docx”*, el cual no cuenta con constancia de envío o recibido de las accionadas pese a referirlo en el numeral 2° del acápite *“9.PRUEBAS”*; aunado a que el mismo solicita en la demanda se le exima de su exigencia, aduciendo *“...la situación de perjuicio irremediable en contra de los derechos colectivos a la salubridad pública; y el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; el acceso a los servicios públicos de salud y a que su prestación sea eficiente y oportuna, por cuanto de no ordenarse la medida se incrementará el colapso en camas uci,...”*.

Sobre el alcance de la existencia de inminente peligro de ocurrir un perjuicio irremediable en contra de los derechos e intereses colectivos, el Consejo de Estado se ha pronunciado en varias oportunidades, entre ellas en proveídos del 1 de septiembre de 2017, en el que citó apartes de una providencia de la misma Corporación¹, el siguiente sentido:²

¹ Proveído del 28 de agosto de 2014, exp. 2014-00972-01 C.P. María Elizabeth García González.

² Sección primera. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdez. Radicación número: 05001-23-33-000-2017-01280-01 (AP).

"[...] Siendo ello así, le corresponde a la Sala determinar el alcance de la expresión "cuando exista inminente peligro de ocurrir un perjuicio irremediable en contra de los derechos e intereses colectivos", contenida en el inciso tercero del artículo 144 del CPCA, en aras de verificar si la situación planteada por el actor, da lugar a eximirlo del requerimiento a las entidades demandadas impuesto por la disposición en comento.

La Corte Constitucional ha precisado de manera reiterada el alcance del concepto de perjuicio irremediable, el cual fue definido, entre otras, en la Sentencia T-293 de 2011, de la siguiente manera:

"[...] Ahora bien, con relación a la configuración de un perjuicio irremediable, esta Corte ha entendido por tal, aquel que sólo puede ser reparado en su integridad mediante una indemnización, porque no se puede remediar ni ser recuperado en su integridad³. Así mismo, se ha dicho en variada jurisprudencia, que para poder determinar si existe o no un perjuicio irremediable en un caso concreto, se deben tener en cuenta ciertos elementos, como son:

A). El perjuicio ha de ser **inminente**: que amenaza o está por suceder prontamente, esto es, tiende a un resultado cierto derivado de una causa que está produciendo la inminencia; B). Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han de ser **urgentes**, es decir, se debe precisar una medida o remedio de forma rápida que evite la configuración de la lesión; C) se requiere que éste sea **grave**, lo que equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona; y D). La urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea **impostergable**, ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad. Si hay postergabilidad de la acción, ésta corre el riesgo de ser ineficaz por inoportuna⁴." (Negrillas fuera del texto)

La Sala considera que tal concepto y presupuestos resultan aplicables a las acciones populares, toda vez que lo pretendido por el Legislador al establecer esta excepción a la regla de requerimiento a la autoridad administrativa, es que ante la gravedad e inminencia de un hecho que pueda ocasionar un perjuicio irreparable a los derechos colectivos, se pueda acudir directamente ante la autoridad judicial, para que ésta adopte las medidas necesarias para que cese la vulneración o amenaza de los mismos [...]"

Así, en el caso sub judice advierte este Despacho que el accionante acudió ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo sin el cumplimiento del requisito de procedibilidad consagrado en los artículos 144 y 161 del C.P.A.C.A., justificado en la existencia de un perjuicio irremediable consistente en, que "...de no ordenarse la medida se incrementará el colapso en camas uci...", al igual de señalar en el acápite 7 que, "El perjuicio irremediable es evidente, por cuanto

³ Sentencias T-225 de 1993 y T-765 de 2010.

⁴ Ibid.

mientras se realiza el proceso de adquisición y aplicación de las vacunas, morirán irremediablemente pacientes por causa de la falta de unidades de cuidados intensivos y el agravamiento de los síntomas del Covid-19, en especial en las personas de la tercera edad y aquellas personas que tienen morbilidades previas, que la ciencia ha venido aceptando con base en las cifras de mortalidad.”

Sin embargo, se advierte de los hechos descritos y que a juicio del actor revisten un inminente peligro de que ocurra un perjuicio irremediable, que los mismos constituyen meras apreciaciones subjetivas que carecen de sustento probatorio médico científico, teniendo en cuenta que lo pretendido a través del presente medio de control es que se autorice de manera inmediata en Colombia el tratamiento médico para la pandemia causada por el virus Covid-19 en su fase temprana mediante la utilización de ivermectina, nitazoxanida y aspirina, limitándose a invocar publicaciones periodísticas e informes y trabajos médicos traído de páginas de internet, que contienen reflexiones sobre el tema, con los cuales pretende demostrar que al no ordenarse la medida aumentaría el colapso en camas UCI.

En esa medida, el Despacho considera que no resulta procedente eximir del cumplimiento del requisito de procedibilidad contenido en los artículos 144 y 161 del C.P.A.C.A. al actor, en tanto su sustentación no resulta suficiente para demostrar la existencia de inminente peligro de ocurrir un perjuicio irremediable como el referido; sumado a que a casi un año de la pandemia se están llevando a cabo diversos tratamientos médicos y medidas tendientes a controlar la propagación del virus y disminuir la ocupación de los servicios de salud, basados en recomendaciones y estudios de la Organización Mundial de la Salud - OMS, entre otras entidades y organizaciones nacionales e internacionales.⁵

Entonces, al no haberse surtido el requisito previo, se ha negado la posibilidad de que las autoridades correspondientes atiendan la reclamación en sede administrativa, y en ejercicio de sus funciones adopten las medidas pertinentes para la protección de los derechos e intereses presuntamente conculcados.

En consecuencia, resulta imperativo inadmitir la demanda a fin de que se acredite el agotamiento de la solicitud expresa ante todas las entidades a demandar, pues solo así puede advertirse su renuencia y justificarse la puesta en conocimiento del asunto ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. (Art. 20 Ley 472 de 1998)

Por lo anterior, el Despacho,

RESUELVE:

⁵Al respecto se puede consultar la página del Ministerio de Salud <https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-tecnicos-covid-19.aspx>

1. **INADMITIR** la presente demanda popular instaurada por JOSE ANTONIO QUICENO en contra del MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS (INVIMA), por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2. **CONCEDER** a la parte actora el término improrrogable de tres (3) días siguientes a la notificación de esta decisión, para que subsane los defectos anotados en las consideraciones so pena de su rechazo, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 472 de 1998.

Notifíquese y Cúmplase,



EDUARDO ANTONIO LUBO BARROS
Magistrado